



**“DECLARACIÓN
DE LOS Y LAS JÓVENES Y MUJERES RURALES E INDÍGENAS
QUE LUCHAMOS POR UN MÉXICO MÁS JUSTO Y EQUITATIVO”**

Junio, 2006.

Las mujeres y jóvenes rurales e indígenas exigimos que el medio rural deje de ser un territorio de pobres y signo de rezago, migración, deterioro, desigualdad, falta de oportunidades y descomposición social y cultural.

Nuestra propuesta pone en la mesa, nuestra insistencia al Estado, sus instituciones y a la sociedad en general a luchar y comprometernos para la revalorización del México rural que representa nuestras raíces, nuestra historia, nuestra posibilidad y oportunidad de construir un México mejor con calidad de vida y futuro para los millones de jóvenes y sus familias que hoy no ven alternativa en sus comunidades de origen.

Sabemos que los tiempos electorales provocan diversos foros, de los(as) y diversos(as) candidatos(as) y corresponde a nuestro interés, recalcar nuestros planteamientos ante todos(as) ellos(as).

La inequidad y la falta de políticas públicas a favor del verdadero desarrollo y la justicia, provocan que las y los habitantes del medio rural migren buscando alternativas y dejando sus comunidades cada día más abandonadas. El fenómeno de la migración ha generado la feminización del campo y con ello también, la feminización de la pobreza y la desesperanza para las y los jóvenes rurales e indígenas.

No podemos presumir de democracia en México si prevalece la desigualdad, la inequidad y la falta de condiciones para que sus habitantes puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades de vivir en forma productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses.

Existen más de 12 millones las mujeres rurales e indígenas y 7.5 millones de jóvenes rurales de 15 a 24 años, y se prevé que para el año 2020 el número de mujeres rurales superará a los varones en aproximadamente 800 mil. Por lo tanto las mujeres y jóvenes rurales representamos el potencial de cambio y transformación de sus comunidades y familias.

El papel de la mujer del campo se está modificando; el hombre ha dejado de ser el único proveedor y sostén de las familias rurales e indígenas. En una cuarta parte de las familias rurales, las mujeres aportan el único ingreso en los hogares.

Nos manifestamos en contra del hecho de que existan 1.4 millones de mujeres rurales que no saben leer ni escribir, que la esperanza de vida de las mujeres rurales sea menor que las de las mujeres urbanas y que padezcan un doble riesgo de muerte por parto; que el 29.62% de los hombres y 38.58% de las mujeres dejen de estudiar antes de los 14 años, que la educación rural sea de calidad inferior al sistema educativo urbano, que existan escuelas unitarias, donde un profesor atiende simultáneamente a niños de grados diversos, que los programas públicos orientados al sector rural no aseguren mayor bienestar y desarrollo sustentable.

Requerimos el empoderamiento de las y los jóvenes y para las mujeres rurales e indígenas, como una prioridad para la recuperación de la dignidad y visibilidad. Nos manifestamos a favor de la revalorización y la recuperación de la confianza, del conocimiento y ejercicio de los derechos y del poder para decidir y actuar, para incidir en políticas públicas del estado mexicano. Nuestro reto es ser un sector capaz de articular propuestas y no solo protestas, de construcción de relaciones sociales justas, de planificación, de identidad, de participación, corresponsabilidad, uso adecuado de los recursos, inversión y evaluación para un desarrollo rural sustentable y equitativo desde lo regional y local. Concebimos nuestra acción como una fuerza capaz de incidir en la conformación de una sociedad con valores éticos y solidarios frente a un mundo de consumo que degrada nuestro planeta.

Insistimos en la responsabilidad del Estado para desarrollar las capacidades y herramientas que faciliten los procesos organizativos y productivos del campo, así como en su obligada responsabilidad de construir los acuerdos necesarios para ser una sociedad rural organizada, capaz de movilizarse, de actuar y asumir responsabilidades y corresponsabilidades para la construcción de un México más justo, equitativo, capaz de combatir los rezagos hoy existentes; sin divisiones partidistas ni ideológicas.

Con la convicción y claridad de la posición y condición de desventaja e inequidad que enfrentan, las mujeres rurales e indígenas buscamos alternativas para nuestras familias y nuestros hijos.

Las mujeres rurales incluidas las mujeres indígenas y jóvenes, tenemos el sueño de contar con una sociedad con justicia y equidad, con una sociedad que aprecie y revalore la importancia del medio rural y aprenda a preservarlo y a reestablecer su gran potencial.

Con esta visión trabajamos y tenemos la experiencia que nos permite exigir que se formulen políticas públicas orientadas a atender de manera integral, las necesidades, problemas y oportunidades de las mujeres y jóvenes rurales e indígenas.

Estamos convencidos que las políticas públicas deben tener visión de largo plazo y ser facilitadoras de los procesos de:

1.- Desarrollo de capacidades y capital social desde lo local. Proponemos acciones para la construcción de un capital social basado en la motivación, participación, corresponsabilidad, intercambio de experiencias, procesos de autoaprendizaje, apoyo técnico y metodologías de acción adecuadas y la formación y capacitación continuas de facilitadores y multiplicadores de una estrategia de formación y desarrollo de capacidades, la organización y movilización locales, focalizando la atención en las y los jóvenes y mujeres rurales e indígenas.

2.- Fortalecimiento productivo y comercial. Queremos que la sociedad identifique y valore los productos agroalimentarios y artesanales de las mujeres rurales e indígenas y que éstos representen calidad y posibilidad de competencia. Queremos que los(as) jóvenes encuentren opciones de empleo en sus regiones de origen rescatando el potencial productivo de las mismas más allá de la vocación agropecuaria tradicional. Queremos que se desarrolle un mercado ético y solidario donde los protagonistas seamos los pequeños productores rurales.

El mercado nos exige cumplir con los requerimientos de competitividad, la inserción en nuevos nichos y la agregación de valor por diversas vías, pero es difícil tener el acceso a los recursos para impulsar y/o adaptar las unidades productivas de las mujeres y jóvenes rurales e indígenas a esas exigencias y necesitamos políticas públicas adecuadas que fomenten y desarrollen la capacidad de emprendimiento, acompañamiento, capacitación y asesoría permanentes.

3.- Servicios financieros adecuados. Questionamos la pérdida de la visión en las políticas del financiamiento incluidas las microfinanzas, olvidando que el microcrédito debe de ser un medio y no un fin. Demandamos alternativas de financiamiento y banca social para nuestras microempresas. En este contexto, queremos que se nos allane el camino tortuoso y además oneroso, para el acceso a créditos con tasas de interés preferenciales para impulsar realmente el desarrollo del sector y que el microcrédito no se rijan con tasas de interés tan altas.

4.- Rescate de la identidad y viabilidad del México Rural con el aprovechamiento de su potencial de servicios ambientales, divulgación y uso de las nuevas tecnologías, renovación de las áreas urbanas en las comunidades, diversificación de las actividades de las familias, la creación y sostén de microempresas, el turismo rural, la recuperación de tradiciones y cultura local, así como la certificación de los productos típicos y locales.

5.- Buenas prácticas reglamentadas y control para conservación del ambiente, de la biodiversidad, el agua, los suelos, el paisaje, apoyos frente a catástrofes naturales, la protección del bienestar animal y la producción biológica u orgánica.

6.- Métodos de participación comunitaria democrática e incluyente para poner en práctica el desarrollo rural y la iniciativa local con recursos descentralizados para programas de acción, dando prioridad a la capacitación de los actores para diseñar y realizar estrategias de desarrollo microregional, sin excluir a los jóvenes y mujeres rurales e indígenas y personas de la tercera edad. Exigimos la participación de las (os) jóvenes y mujeres rurales e indígenas en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable que actualmente se ve obstaculizada por los procedimientos de convocatoria y

representación impuestos.

7.- Generar un nuevo modo de entender las políticas de desarrollo para lograr recuperar competitividad económica y capital social al impulsar formas de solidaridad social basadas en la cooperación entre actores institucionales distintos no siempre acostumbrados a dialogar, en lugar de limitarse a dar subsidios sin perspectivas y al asistencialismo.

8.- Lograr la coordinación intersectorial, reducir y eliminar las trabas burocráticas que se imponen desde la posición de autoridad mal entendida.

La anualidad del presupuesto impide el diseño e implementación de políticas de largo plazo y genera no solo desgaste en la gestión tortuosa ante diversas dependencias de gobierno, que tienen diferentes políticas, programas y requisitos, sino también la poca efectividad y medición del impacto de las acciones y la falta de una visión de futuro.

El Estado debe de aprender a propiciar la movilización de la sociedad; debe alcanzar la sensibilidad y capacidad de articulación y vinculación con los diversos sectores y apostarle al desarrollo del México rural como una prioridad, con iniciativas innovadoras que aseguren la participación y verdaderos procesos de organización rechazando el uso clientelar de los programas y apoyos.

Llevarlo a cabo requiere de la ampliación de los montos y orientación de los programas e instrumentos orientados a la inversión productiva, educativa, tecnológica, de servicios e infraestructura.

Las y los jóvenes rurales exigimos políticas públicas claras y efectivas para la juventud rural en materia de salud, capacitación y empleo, que nos permitan decidir, hacer, ser, disfrutar y aspirar a tener una vida digna y satisfactoria.

Las mujeres rurales exigimos respeto a nuestros derechos, a ser escuchadas, a tener incidencia en la toma de decisiones, a que se eliminen todas las formas de violencia. Exigimos oportunidades para desarrollar emprendimientos productivos, no caridad. Exigimos, reconocimiento y revalorización por parte en la sociedad.

Hacemos un llamado para que se comprenda que nuestro planteamiento no es sólo un problema de los y las jóvenes y mujeres rurales e indígenas, sino que es un problema urgente de atender por todos los niveles de gobierno y toda la sociedad mexicana.

FIRMANTES

111 ORGANIZACIONES DE 17 ESTADOS